



LIBERTAD Y DESARROLLO

RESEÑA LEGISLATIVA

ISSN 0717-0416

Nº 1321

2 de Marzo de 2018

MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA

BOLETÍN 11598-03

VOLUMEN I

RESEÑA LEGISLATIVA es una publicación de
LIBERTAD Y DESARROLLO
DIRECTOR RESPONSABLE: Luis Larraín A.
EDITOR: Pablo Kangiser G.
DIRECCIÓN: Alcántara 498, Las Condes, Santiago,
Chile.



RESEÑA LEGISLATIVA

Nº 1321

2 DE MARZO DE 2018

ÍNDICE

MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA

BOLETÍN 11598-03

VOLUMEN I

OPINIÓN EJECUTIVA	4
CONTENIDO DEL PROYECTO DE LEY	5
COMENTARIOS DE MÉRITO EN GENERAL	12
COMENTARIOS DE MÉRITO ESPECÍFICO	15
TEXTO DEL PROYECTO DE LEY	24

VOLUMEN I

CONTINUACIÓN TEXTO DEL PROYECTO DE LEY	32
DISPOSICIONES TRANSITORIAS	72

MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA

DESCRIPCIÓN BOLETÍN 11598-03

REFERENCIA	Modifica diversos cuerpos legales para modernizar la gestión pública e incentivar la productividad de la actividad económica
INICIATIVA	Mensaje presidencial
ORIGEN	Cámara de Diputados
MINISTERIO	De Hacienda, De Economía, Fomento y Turismo y De Justicia y Derechos Humanos
INGRESO	25 de enero, 2018
ARTICULADO	30 artículos permanentes y 10 transitorios; los artículos permanentes modifican los siguientes cuerpos legales: ley sobre documentos electrónicos; Código de Procedimiento Civil; ley sobre letra de cambio y pagaré y Código de Comercio; bases de procedimientos administrativos; unidad de análisis financiero; ley sobre casinos de juego; Ordenanza de Aduanas; Ministerio de las Culturas las Artes y el Patrimonio; Instituciones nacionales patrimoniales, dependientes del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural; sistemas de microscopía y micrograbación de documentos; simplificación del régimen de constitución de sociedades comerciales; ley sobre rentas municipales; Ley general de urbanismo y construcciones; Ley orgánica constitucional de municipalidades; Ley orgánica constitucional del Congreso Nacional; contratos administrativos de suministro; DFL que organiza las secretarías de Estado (Ley de Ministerios); Ley sobre impuesto a la renta; Ley sobre el Impuesto al Valor Agregado; Ley marco para la inversión extranjera; ley sobre tratamiento tributario de instrumentos derivados; ley sobre compensación y liquidación de instrumentos financieros; constitución y operación de entidades privadas de depósito y custodia de valores; bolsas de productos agropecuarios, y ley de fomento de la industria de capital de riesgo; además, se faculta a la CORFO, al Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones para participar en la formación, constitución o administración de personas jurídicas de derecho privado sin fines de lucro, y se crea la Plataforma de Trámites Electrónicos, para los órganos de la Administración del Estado


OPINIÓN EJECUTIVA DE LYD

Se trata de un proyecto misceláneo que intenta mejorar la tramitación de asuntos de particulares ante organismos del Estado. Para ello perfecciona el sistema de firma electrónica avanzada, incentivando la identificación digital única y precisa el valor probatorio de los documentos suscritos mediante esa firma; además modifica puntualmente varios otros cuerpos legales, para hacer más expedita la función pública, en materia de patente provisoria, permisos de edificación, compras y contratación pública y otras materias. En este sentido se trata de un proyecto de ley positivo, en línea con la modernización de las instituciones

Sin embargo, entre las materias misceláneas que este proyecto aborda, resulta discutible que se permita a la CORFO crear personas jurídicas de derecho privado sin fines de lucro, las que a su vez podrían crear entidades con fines de lucro. Lo anterior en tanto podría tratarse de un mecanismo que pretende evitar la autorización legal para desarrollar actividades económicas.

Por otra parte, es positivo que en la tramitación de proyectos de ley susceptibles de causar un impacto relevante, se deban incluir, dentro de sus fundamentos, un informe de evaluación de impacto regulatorio, que analice los efectos cuantitativos y cualitativos del proyecto, esto es, los costos probables y beneficios asociados tanto para el sector público como para el privado; aunque sería deseable información más específica sobre el contenido de este informe.

En materia tributaria, se requiere también precisar los alcances del proyecto, ya que se refiere al IVA, al impuesto a los derivados y a la inversión extranjera.

En general, a pesar de algunas materias puntualmente objetables, el proyecto está bien encaminado hacia modernizar la gestión del aparato público y en relación con los particulares 

CONTENIDO DEL **PROYECTO DE LEY**

Bajo el concepto de modernización de la gestión pública, se proponen dos tipos de materias:

A. Medidas para intensificar el uso de firma electrónica avanzada (FEA) en todo tipo de documentos, respecto de lo cual, cabe destacar lo siguiente:

1. Identificación digital única

Se promueve la identificación digital única mediante medios electrónicos, provista por el Servicio de Registro Civil o, según el caso, por el Servicio de Impuestos Internos, la que también podrá utilizarse entre particulares con igual valor probatorio; además, se regula el sellado de tiempo, para dar certeza sobre la fecha y hora de un documento electrónico; con la misma finalidad, se propone que un órgano público, aún no definido, pueda actuar como prestador del servicio de acreditación de forma electrónica avanzada.

2. Valor probatorio de los instrumentos electrónicos

Por lo tanto, los instrumentos públicos electrónicos, en que conste un contrato, tendrán valor como tales si han sido suscritos con FEA y sellado de tiempo; de este modo se entenderán como firmados ante notario u otro ministro de fe.

Se regula el valor probatorio de los instrumentos electrónicos, según se hubieren suscrito con FEA y sellado de tiempo, o con firma electrónica sin sellado de tiempo, en relación a los medios probatorios del Código de Procedimiento Civil; se regula también el caso de un certificador de firma extranjero.

3. Títulos de crédito

Lo anterior se hace expresamente aplicable a la letra de cambio y al pagaré, que podrán constituirse electrónicamente, contando con FEA y sellado de tiempo, lo que es igualmente válido para el endoso y para la constitución de un aval y para el protesto del documento, en su caso.

4. Plataforma de trámites electrónicos

Se crea una Plataforma de Trámites Electrónicos que permitirá la relación directa de los órganos de la Administración del Estado con personas naturales o jurídicas, produciendo los mismos efectos que los trámites realizados en las oficinas de los organismos que adscriban. Estará a cargo del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo.

5. Procedimientos administrativos

Se regula la aplicación de instrumentos electrónicos a la ley de procedimientos administrativos de carácter general, incluyendo presentaciones, notificaciones (en una casilla electrónica, de responsabilidad del notificado) y resoluciones. Asimismo, serán aplicables a los procedimientos administrativos para la aplicación de sanciones por parte de la Unidad de Análisis Financiero.

B. Otras modificaciones y perfeccionamientos en relación a las siguientes materias:

1. Asuntos municipales

a) **Patente Provisoria:** el proyecto permite a los establecimientos empezar a funcionar desde que se otorgue la patente provisoria, la que tendrá duración de un año. Si dentro de éste no cumple con las exigencias legales de funcionamiento, incluida la autorización sanitaria en los casos que se exima su exigencia previa, será clausurado por la Municipalidad.

b) **Nombramiento del jefe de unidad de obras municipales:** se realizará por el Alcalde previo concurso público, de entre los integrantes de una nómina propuesta por un comité de selección. El Comité estará integrado por el Alcalde, un miembro del Consejo de Alta Dirección Pública, o sus respectivos representantes, y el Secretario Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de la región respectiva.

El procedimiento será análogo al del nombramiento de Altos Directivos Públicos de segundo nivel jerárquico. El Alcalde deberá definir el perfil profesional, competencias, aptitudes, experiencia mínima y requisitos de especialización requeridos y los desafíos del cargo, previo informe favorable del Secretario Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo y aprobado por el Consejo de Alta Dirección Pública. El cargo tendrá una duración de 5 años, permitiéndose la reelección a través del mismo medio.

c) **Modernización de trámites ante la Dirección de Obras Municipales:** los permisos y reclamos ante la Dirección de Obras Municipales se tramitarán en una plataforma digital mantenida por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. El Director de Obras deberá publicar las resoluciones que aprueben las obras de urbanización en su sitio web y en el sistema de información regulado por la ley de transparencia del mercado del suelo. El plazo para interponer reclamos contra las resoluciones dictadas por los Directores se empezará a contar desde que es publicado en la plataforma. A su vez, las solicitudes, actos administrativos derivados e información sobre cantidad, tipo, tiempo de tramitación e identidad de los solicitantes serán de acceso público.

2. Ley General de Urbanismo y Construcciones

- a) **Determinación de las sanciones por infracciones a la ley:** El juez de policía local deberá considerar la importancia del daño o peligro causado, el beneficio económico obtenido, la intencionalidad y grado de participación en los hechos, la conducta anterior y capacidad económica del infractor para determinar la sanción aplicable a las infracciones a las disposiciones de esta ley.
- b) **Publicidad de los permisos de edificación:** La publicidad de la aprobación de un permiso de edificación, de loteo o de cambio de destino de un edificio dependerá si afecta o no al interés nacional: si no lo hace, se realizará mediante la instalación por el propietario de un letrero visible en el mismo predio, dentro de un plazo de 5 días, con los aspectos principales del proyecto, mientras que si lo afecta, deberá, además, publicar el permiso en el Diario Oficial dentro de 10 días desde su otorgamiento, transcurridos los cuales se presumirá de derecho conocido por todos. Se entenderá que afectan el interés nacional los edificios de uso público y demás que determine la Ordenanza General.

3. Ley de bases de contratos administrativos de suministros y prestación de servicios

- a) **Extensión de la aplicación de la ley:** Se aplicará al Congreso Nacional, con respecto a los contratos que celebre a título oneroso, para el suministro de bienes muebles y servicios que requiera para el desarrollo de sus funciones. Los organismos no contemplados en la ley, receptores de fondos públicos, podrán adherir voluntariamente al Sistema de Información de Compras y Contratación Pública y a los Convenios Marco suscritos por la Dirección de Compras y Contratación Pública.
- b) **Sistema de Información de Compras y Contratación Pública:** Las licitaciones para la contratación de consultorías, asesorías y estudios referidos a la concesión de obras públicas que realice el Ministerio de Obras Públicas, deberán desarrollarse por medio del Sistema de Información de Compras y Contratación Pública, desde la publicación hasta la adjudicación. La ejecución contractual deberá realizarse por los medios electrónicos que establezca la Dirección de Compras y Contratación Pública y deberá publicarse la información referida a ello. Además, los contratos tipo contenidos en las bases de licitación de convenios marco se entenderán perfeccionados desde la notificación de la adjudicación respectiva a través del Sistema. El adjudicatario deberá actualizar sus antecedentes legales en el Registro de Contratistas y Proveedores, y acompañar los antecedentes requeridos.
- c) **Bases de licitación y contrataciones:** Se declara que la administración debe utilizar la menor cantidad de recursos en sus contrataciones. A su vez, la Dirección de Compras y Contratación Pública deberá promover la innovación, eficiencia, transparencia, probidad, competitividad y buenas prácticas en las contrataciones, mediante acciones destinadas a

ello. Deberá monitorear los procedimientos de contratación y ejecución contractual y emitir informes y proponer formatos de bases administrativas para que puedan ser utilizados en los procesos de compras. Por último, el proyecto establece que las bases de licitación deben considerar el ciclo completo de la vida del bien, servicio u obra al establecer sus condiciones.

4. Formación de personas jurídicas de derecho privado

- a) **Por la Corporación de Fomento de la Producción:** podrá formar, constituir o administrar personas jurídicas de derecho privado sin fines de lucro cuyo objeto sea la investigación aplicada, el desarrollo, la difusión de tecnología e innovación, o proveer bienes públicos, generar información de interés público, elaborar estándares y sistemas de certificación, fomentar la innovación, la productividad y la competitividad del país. Estas personas jurídicas podrán realizar estudios e investigaciones, prestar asesorías y servicios a personas naturales y jurídicas de derecho público o privado, nacionales o extranjeras, y constituir personas jurídicas con o sin fines de lucro, para exportar activos intangibles y tecnologías que resulten de las actividades desarrolladas, con un máximo de un tercio del capital o de los derechos sociales. No pueden comprometer la responsabilidad financiera del Estado ni ejercer potestades públicas.
- b) **Por el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones:** se les faculta para constituir una persona jurídica de derecho privado sin fines de lucro cuyo objeto sea la generación de información, estudios, propuestas y bienes y servicios, que faciliten la toma de decisión y coordinación entre los actores públicos y privados que participen de las cadenas logísticas de operaciones de comercio exterior, para incrementar su eficiencia, competitividad, productividad y sostenibilidad. Para ello podrá celebrar convenios de colaboración con entidades públicas y privadas. No pueden comprometer la responsabilidad financiera del Estado ni ejercer potestades públicas.

5. Modificaciones a la tramitación de leyes y decretos

- a) **Tramitación de proyectos de Ley:** Los proyectos susceptibles de causar un impacto relevante deberán incluir dentro de sus fundamentos un informe de evaluación de impacto regulatorio, que analice los efectos cuantitativos y cualitativos del proyecto.

Los criterios para determinar qué proyectos tienen un impacto social y económico relevante y la metodología para preparar el informe dependerán del origen del proyecto (el presidente instruirá a sus ministros sobre ello y las cámaras lo establecerán en sus respectivos reglamentos). El presidente puede incluir la consulta pública de las ideas matrices del proyecto.

- b) **Tramitación de Decretos Supremos:** Los ministerios que efectúen trámites de información o consulta pública sobre decretos supremos que aprueben, modifiquen o deroguen reglamentos, deberán acompañar dichos antecedentes al documento sometido a consideración del Presidente de la República.

6. **Modificaciones a impuestos**

- a) **Impuesto Adicional:** Para demostrar la residencia de los contribuyentes del impuesto adicional que quieran acceder a la exención otorgada para los residentes de países con el cuales Chile hubiere suscrito un convenio para evitar la doble tributación, se deberá contar con un certificado de residencia fiscal emitido por la autoridad del país respectivo y se presumirá que acredita la residencia durante todo el año comercial en que se emita.
- b) **Impuesto a la Renta:** El proyecto permite que por medio de un decreto del Ministerio de Hacienda se exima del cumplimiento del plazo legal de un año entre la adquisición y la enajenación de un instrumento de deuda pública, para que el mayor valor sea considerado como ingreso no renta.
- c) **Impuesto a las Ventas y Servicios:** El proyecto permite a cualquier persona natural o jurídica, residente o domiciliada en el país acceder a la exención del impuesto a las ventas y servicios respecto de ciertos bienes de capital importados, que impliquen una inversión por un monto igual o superior a US\$5.000.000. Elimina dos de los requisitos establecidos para conceder la exención: (1) que la importación de los bienes fuera al menos 12 meses antes de su internación al país, o de su adquisición en Chile, o bien, de la dictación de la resolución de calificación ambiental u otorgamiento de la concesión de uso oneroso del terreno; y (2) la presentación del certificado de inversionista extranjero emitido por la Agencia de Inversión Extranjera.
- d) **Impuesto al Valor Agregado:** El Ministerio de Hacienda podrá autorizar a los exportadores, mediante resolución exenta, a acogerse al sistema de recuperación anticipado del IVA que se hubiese recargado al adquirir bienes o utilizar servicios destinados a la exportación, o que se hubiese pagado al importar bienes para el mismo objeto. Además, permite a la empresa que subsista en un proceso de reorganización empresarial y que realice las exportaciones comprometidas en el proyecto de inversión, mantener vigente la autorización para obtener la recuperación del IVA.
- e) **Impuestos a instrumentos derivados:** El proyecto faculta a que no se apliquen sanciones a los contribuyentes que celebren contratos de derivados por no realizar las declaraciones correspondientes, si presenta declaraciones rectificatorias en la forma establecida por resolución exenta del SII. Permite, además, que se deduzcan las pérdidas y gastos asociados a estas operaciones cuando no se realicen por intermediarios autorizados, si es que cuenta con fecha cierta por alguno de los mecanismos que establece la ley.

7. Incentivos a la inversión extranjera

- a) **Marco para la inversión extranjera:** Los inversionistas extranjeros podrán acompañar copia de la resolución otorgada por el Ministerio de Hacienda que reconoce el cumplimiento de los requisitos para la exención del impuesto a las ventas y servicios, respecto de ciertos bienes de capital importados, que impliquen una inversión por un monto igual o superior a US\$5.000.000, para solicitar el certificado emitido por la Agencia de Promoción de la Inversión Extranjera para acceder al régimen aplicable a la inversión extranjera directa.
- b) **Sistema de comercio exterior:** El proyecto ordena a los organismos públicos participantes y responsables de los procesos de comercio exterior utilizar las tecnologías de información, prácticas internacionales y herramientas electrónicas disponibles para facilitar el comercio. Deberán reducir los obstáculos a los procesos de las exportaciones, importaciones y tránsito de mercancías, y solicitar que se envíe la información asociada mediante el sistema disponible de ventanilla única de comercio exterior de Chile. El Ministerio de Hacienda deberá establecer mediante reglamento los estándares mínimos, requisitos tecnológicos y plazos para que cada organismo cumpla con el funcionamiento de dicho sistema.

8. Instrumentos financieros

- a) **Sistemas de compensación y liquidación de instrumentos financieros:** El proyecto introduce tres nuevos conceptos: cliente, segregación y portabilidad. En virtud de ellos, los registros de compensación y liquidación deberán estar separados de los registros de las garantías otorgadas, de modo que éstas últimas no estén expuestas a pérdidas vinculadas a operaciones distintas de aquellas que caucionaron. Los Sistemas deben establecer un plan de regularización para los casos de incumplimiento que comprometan su situación financiera y, en ciertos casos, deberán efectuar traspasos a otros participantes. Las administradoras deberán proporcionar a la Comisión para el Mercado Financiero información respecto a las operaciones sobre instrumentos financieros que sean objeto de compensación y liquidación, y ésta, a su vez, podrá compartirla información con la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, la Superintendencia de Pensiones, el Banco Central de Chile, el Consejo de Estabilidad Financiera, y organismos supervisores extranjeros con los que se tenga un convenio de intercambio recíproco de información.
- b) **Entidades privadas de depósito y custodia de valores:** Deberán contar con un gobierno corporativo y con un sistema de gestión de riesgos para asegurar el resguardo de los valores para su custodia y transferencia, a fin de garantizar la continuidad financiera y operacional de la empresa. Además, podrán proporcionar información sobre los valores recibidos en depósito a organismos jurisdiccionales con los que Chile haya suscrito acuerdos de intercambio de información, respecto a ciudadanos, residentes o entidades organizadas bajo las leyes de dichas jurisdicciones. La Comisión para el Mercado

Financiero deberá establecer los estándares que deben respetar mediante norma de carácter general. Si son transgredidos, deberá hacer indicaciones mediante resolución fundada, estableciendo un plazo para subsanar sus observaciones.

- c) **Bolsas de Productos:** La ley 19.220 ya no regulará sólo a bolsas de productos agropecuarios, sino a todas las bolsas de productos de bienes autorizados por la Comisión para el Mercado Financiero. Ésta deberá indicar, mediante una norma de carácter general, los requisitos de idoneidad que deberán cumplir las personas que realicen actividades relacionadas con la intermediación en una corredora de productos, y la forma y periodicidad en que deben acreditar tener conocimientos suficientes para ello. Los reclamos que se deriven de las suspensiones de la compra o venta de uno o más productos por parte de la Comisión, se harán de acuerdo al procedimiento establecido para ello en la ley que la crea. Las bolsas llevarán un Registro de Productos en el que se inscribirán los padrones que describan las características y condiciones que deberán cumplir, y los Registros de Entidades Certificadoras, que tendrán carácter de públicos. Los corredores serán responsables de la ejecución de las operaciones que se pacten por su intermedio y ya no podrán dedicarse a la compra y venta de productos en bolsa por cuenta propia. Se elimina también la regulación establecida para el caso en que el comitente deseara mantener reserva de su identidad.

9. Fomento al capital de riesgo

El proyecto autoriza a la CORFO a suscribir y pagar cuotas de fondos de inversión nacionales, cuyo objeto sea la inversión en cuotas de fondos de inversión de capital de riesgo y a suscribir y pagar directamente cuotas de fondos de inversión de capital de riesgo. En estos fondos podrán participar inversionistas institucionales y podrán invertir en sociedades anónimas cerradas y sociedades por acciones, que no tengan por objeto una serie de actividades, dentro de las cuales, el proyecto elimina las que presten servicios financieros. Elimina el monto máximo de inversión de UTM2.000.000 (extensible a UTM3.500.000) al momento de asumir cada compromiso de suscripción. Por último, se autoriza a la CORFO a aceptar que el pago de estos créditos sea hasta los recursos disponibles del fondo, extinguiéndose la obligación por el exceso, siempre que la administradora y el fondo cumplan con el Reglamento Interno, el plan de negocios y el programa de financiamiento, y que los administradores, aportantes y sus relacionados no sean destinatarios de recursos del fondo ni tengan compromisos financieros en su favor. En caso de incumplimiento grave, la CORFO puede rechazar la solicitud e iniciar acciones legales en su contra ■■■■

IV. COMENTARIOS DE MÉRITO EN GENERAL

Resulta evidente la relación entre modernización del Estado y productividad. Por eso, no es de extrañarse que durante los últimos años, y con ánimo de incentivar la inversión nacional y extranjera, los sucesivos gobiernos se hayan preocupado de trabajar en elaborar e implementar reformas que permitan la modernización de los procedimientos y la gestión pública. En este sentido, y por poner algunos ejemplos, la creación de la Comisión Nacional de Productividad (2015) en el marco de la agenda de productividad impulsada por la Presidenta Bachelet, en su segundo mandato, y la inclusión en el programa de gobierno del Presidente electo, Sebastián Piñera, de diversas medidas que pretenden la modernización del aparato estatal con proyectos como Chile sin Papeleo 2025 y Chile Atiende Online.

Por lo tanto, el proyecto de ley no es una innovación, sino que es continuador de una tendencia que busca modernizar la estructura estatal, haciéndola más ágil y eficiente, y por ende, transformándola en un medio para facilitar el crecimiento económico a través del emprendimiento y la inversión.

Para entender la estrategia de modernización que se propone implementar resulta necesario, como se verá a continuación, separar los tres ejes en que el mismo proyecto de ley se divide.

Uno de los principales objetivos del proyecto es el perfeccionamiento de la ley N° 19.799, del año 2002, que instauraba en nuestro país un sistema de acreditación por medio de la firma electrónica avanzada (FEA). Curiosamente, a pesar de ser hoy el país líder en uso de internet en Latinoamérica

y a que estadísticas recientes de la Subsecretaría de Telecomunicaciones señalan que durante el tercer trimestre de 2017 se alcanzó la cifra record de 102 conexiones a internet cada 100 habitantes, la implementación y el uso de la firma electrónica no se masificó como se esperaba, ni entre las empresas ni entre las personas naturales.

Sin ir más lejos, el propio informe de productividad elaborado por el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, que va acompañado en el proyecto de ley, señala que “de las más de 260 mil nuevas empresas que se han constituido a través de Empresa en un día, solo un 4% lo hizo utilizando FEA, mientras que el 96% restante finalizó el trámite firmando en una notaría.

El mismo informe de productividad señala dos causas probables del fracaso en la implementación de la firma electrónica avanzada: la primera de ellas dice relación con la falta de equivalencia funcional y jurídica de la firma electrónica respecto de la firma manual de documentos, es decir, es menester que no existan diferencias ni legales ni probatorias entre un tipo de firma y la otra; la segunda, tiene que ver con los elevados costos asociados al enrolamiento presencial de los usuarios por parte de las empresas que, por ley, proveen el servicio.

Ambas dificultades aparecen superadas con las reformas incorporadas en el proyecto de ley en revisión. Una, con las modificaciones a diversos cuerpos legales, entre ellos el Código de Procedimiento Civil, que establecen que los documentos suscritos con firma electrónica avanzada tendrán igual valor probatorio que los instrumentos suscritos con firma manuscrita y en

soporte papel; la otra, con la proposición de un verdadero “enrolamiento en línea” que permita la comprobación de la identidad del adquirente sin necesidad de que comparezca presencialmente.

El antes citado informe de productividad del proyecto de ley es categórico en señalar que estos cambios generarán un ahorro notable tanto para los proveedores de los servicios asociados a la FEA, como para los usuarios de los mismos. Estos últimos, según estimaciones, obtendrían ahorros por alrededor de mil millones de pesos anuales por la constitución de empresas por medio de firma electrónica avanzada. Por otra parte, los grandes damnificados con esta propuesta de mejora regulatoria serán, evidentemente, los notarios públicos, quienes dejarán de recibir ingresos por aproximadamente 507 millones de pesos al año.

Del mismo modo, se introducen modificaciones a la regulación de la patente comercial provisoria administrada, hoy por hoy, de forma discrecional por las municipalidades y que constituye un impuesto.

La propuesta busca agilizar aún más la obtención de estas patentes y dar mayores certezas a los usuarios en relación al plazo de vigencia de la patente provisoria. Actualmente el plazo es de hasta un año, pero con el riesgo de que eventualmente el municipio conceda la patente por un tiempo menor, que haga imposible para la empresa cumplir los requisitos que debe reunir para optar a la patente definitiva.

A raíz de lo anterior, las modificaciones propuestas pretenden establecer un plazo fijo de otorgamiento de la patente provisoria de un año, únicamente cumpliendo con los requisitos establecidos en el artículo 13 del proyecto de ley, entre los que no se encuentra “los permisos que exijan otras leyes

especiales”, como lo requiere la legislación hoy vigente.

Es por esto que las modificaciones que se introducen en este proyecto de ley parecen ser una buena noticia para empresarios y emprendedores en cuanto se facilitan los procedimientos para que comiencen a operar los establecimientos comerciales, concediéndoseles un plazo prudente y sin sobrecarga de requisitos para obtener la patente comercial definitiva.

Por último, dentro de este eje cabe destacar las mejoras que se pretenden realizar al sistema de compras públicas, que simplifican los procesos de suscripción y almacenamiento de convenios marco y amplían cantidad de entidades y materias que quedarán sujetas a este sistema, haciéndolo más eficiente y transparente.

El perfeccionamiento del actual mecanismo de devolución anticipada de IVA exportador, en la práctica, significará que los exportadores que realicen proyectos de inversión fuera de Chile y que utilicen un financiamiento vía devolución anticipada de IVA exportador ya no tendrán la limitación que les significa hoy, para la empresa continuadora que subsiste, el deber de restituir el IVA devuelto, en la eventualidad de verificarse un proceso de reorganización empresarial.

Lo anterior, junto con la exención del IVA para los inversionistas extranjeros en la importación de bienes de capital (que los equipará a los inversionistas locales), las modificaciones legales que beneficiarán a los proyectos de inversión desarrollados a través de modalidades en las que no haya identidad entre quien lleva a cabo el proyecto y el importador, y el beneficio en el caso de los proyectos de inversión que inicien sus operaciones antes de 12 meses contados desde la

importación de los bienes de capital, parecen ser cambios en materia tributaria de gran ayuda para alentar la inversión y las exportaciones en nuestro país.

Además, deben destacarse ciertos cambios que afectarán positivamente a los bancos e instituciones financieras como lo son las modificaciones que beneficiarán a todos aquellos contribuyentes que deben informar al Servicio de Impuestos Internos sobre contratos de derivados, ya que se permitirá que los errores en dichas declaraciones puedan ser subsanadas mediante una declaración que lo rectifique, y las precisiones en el tratamiento como ingreso no renta respecto de enajenaciones de los instrumentos de deuda señalados en el artículo 104 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, que, junto

con constituir incentivos a la inversión, pueden considerarse como una forma de reducir los riesgos financieros.

El proyecto de ley introduce varias reformas a fin de adaptar la regulación del mercado financiero a los cambios que éste ha experimentado en los últimos años, y sobre todo, potenciar el funcionamiento de las infraestructuras financieras y promover el intercambio de información dentro del sistema financiero entre los entes regulados y las entidades supervisoras.

Por último, parece positivo el impulso que se da a CORFO de participar más activamente, por medio de un fondo de fondos, en el fomento de la industria de capital de riesgo ■■■

COMENTARIOS DE MÉRITO ESPECÍFICO

1.- ESCRITURAS PÚBLICAS

El proyecto, en cuanto a firma electrónica, nada dice respecto de si las escrituras públicas pueden o no ser generadas por este instrumento tecnológico. Sin embargo, valdría la pena examinar la posibilidad de facilitar su otorgamiento a través de firma electrónica avanzada, sin perjuicio de otorgarlas también en la forma actualmente prevista.

Como se sabe, la escritura pública es el instrumento público o auténtico otorgado con las solemnidades que fija la ley, por el competente notario, e incorporado en su protocolo o registro público¹. A su vez, el instrumento público o auténtico es el autorizado con las solemnidades legales, por el competente funcionario². Varios son los funcionarios que pueden autorizar instrumentos públicos, dentro de su competencia, como los secretarios municipales, los receptores judiciales, los secretarios de los juzgados y otros. Si el funcionario que autoriza el instrumento público es un notario y lo incluye en su registro, entonces tenemos una escritura pública. Por lo tanto, ésta no queda en poder de las partes, como un documento de otra naturaleza, sino que queda en poder del notario y, luego de cierto tiempo, unos dos años, será enviada al Archivo Judicial; desde el cual las partes y todos los interesados pueden pedir las copias que estimen convenientes.

¿Podrían generarse escrituras públicas por medio de instrumento digital? Al tenor de las

disposiciones del proyecto de ley en examen y de la ley 19.799 sobre documentos electrónicos, ello no parece posible, ya que ni esta ley ni el proyecto están pensada para ese propósito, pero fácilmente podría adecuarse su normativa, lo que sería recomendable, y lograr un importante avance en la materia.

Veamos algunos aspectos básicos. La firma del documento y su texto ya no serían responsabilidad del notario, sino del sistema de certificación de firma electrónica avanzada, ya que éste garantiza la autenticidad del firmante y asegura que no puede negarse la autenticidad y autoría del documento. Señala al efecto el artículo 2° letra g) de la ley 19.799: Firma electrónica avanzada es aquella certificada por un prestador acreditado, que ha sido creada usando medios que el titular mantiene bajo su exclusivo control, de manera que se vincule únicamente al mismo y a los datos a los que se refiere, permitiendo la detección posterior de cualquier modificación, verificando la identidad del titular e impidiendo que desconozca la integridad del documento y su autoría.

Siendo así, un documento suscrito con firma electrónica avanzada (FEA) no cumple con los requisitos de la escritura pública, a menos que se adecue la normativa, en el siguiente sentido: a) no será necesaria la intervención del notario para dar fe del hecho de haberse otorgado el instrumento y la identidad del suscriptor; b) respecto de su fecha, se debería aplicar la normativa sobre el sellado de tiempo que se regula en el presente proyecto de ley. Dicho abiertamente, no sería necesaria la participación del notario público en ninguna de estas materias, excepto en la siguiente: que la escritura pública debe quedar incorporada en el registro del

1 Artículo 403 del Código Orgánico de Tribunales.

2 Artículo 1699 del Código Civil.

notario, por lo cual c) el documento electrónico con FEA y sellado de tiempo debería incorporarse en un registro público. ¿En qué registro? Depende de la naturaleza del documento: si se trata de un contrato de compraventa de bienes raíces, el documento electrónico debería registrarse íntegramente en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces, en lugar de limitarse, como sucede actualmente, a inscribir el contrato otorgado por escritura pública, esto es, a dejar constancia de los datos esenciales de la escritura (las partes, fecha, notaría, individualización del inmueble, precio y otros). Las copias las otorgaría el Conservador de Bienes Raíces que es un ministro de fe. Según la naturaleza del acto o contrato que conste en el documento electrónico, debería ser registrado en el registro de comercio, de minas, de aeronaves, etcétera. Residualmente, para instrumentos no destinados a un registro determinado, se incorporarían en el protocolo digital de un notario.

Todo esto supone la digitalización del sistema registral, lo que requeriría del tiempo necesario para lograrlo de manera adecuada y eficiente; pero se debería empezar a sentar las bases de esta inevitable modernización.

2.- ASUNTOS MUNICIPALES

a) Patente Provisoria:

Las personas que inicien un giro o actividad gravada con patente municipal, requieren de la autorización de la Municipalidad respectiva para funcionar. Ésta deberá otorgar a los establecimientos que lo requieran, una patente transitoria cuando cumplan con los requisitos mínimos establecidos por la ley. Es

adecuado que se permita al establecimiento funcionar desde que se otorgue la patente provisoria puesto que incentiva la actividad económica. Por otro lado, eliminar la facultad de las Municipalidades de fijar un plazo menor a un año para exigir el cumplimiento de las exigencias legales para el funcionamiento de los establecimientos, exigiendo que sea de un año, permite estandarizar los procedimientos en las distintas Municipalidades y evitar arbitrariedades dentro de la misma.

b) Nombramiento del jefe de unidad de obras municipales:

El proyecto establece un mecanismo para el nombramiento del jefe de la unidad encargada de obras municipales, lo cual no se encontraba antes regulado. Es importante legislar en torno esta elección, en cuanto a que los jefes de unidad de obras municipales se han visto envueltos en severas críticas por el mal desempeño que han demostrado algunos de ellos en sus cargos. Es favorable que se establezca el concurso público como medio de selección, asegurando la objetividad del proceso. Sin embargo, el Alcalde, que es quien elige de entre la nómina presentada por el comité de selección, no debería participar también en éste, ya que tomará un rol demasiado determinante, haciendo irrelevante deber elegir de entre una nómina si es él mismo quien la elabora. De todas maneras, queda aún pendiente uno de los principales problemas con respecto a las decisiones que toman estos jefes de unidad, que no se soluciona mejorando el mecanismo de selección de los mismos, que dice relación con la falta de juridicidad de sus resoluciones administrativas. Debería buscarse una fórmula para solucionarlo, como por ejemplo, de que ciertas decisiones deban ser

tomadas en consulta con la Dirección Jurídica de la Municipalidad.

c) Modernización de trámites ante la Dirección de Obras Municipales:

No se ven razones para objetar la tramitación por medios electrónicos de los trámites y reclamos ante esta institución. Consideramos importante que la información sobre las solicitudes y actos administrativos sean de acceso público, para asegurar su transparencia, como también la información sobre la cantidad y tipo de solicitudes que se presenten, tiempo de tramitación e identidad de los solicitantes, para fines estadísticos.

3.- LEY GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCIONES

a) Determinación de la sanciones por infracciones a la ley:

Las multas que puede establecer el juez de policía local por infracciones a las disposiciones de la Ley General de Urbanismo y Construcciones oscilan entre el 0,5% y el 20% del presupuesto de la obra, o bien, en caso de que no exista un presupuesto, entre 1 a 100 UTM. La ley no daba directrices al juez para determinar la sanción específica, pudiendo ser los resultados de la elección de montos considerablemente distintos. Los criterios establecidos (la importancia del daño o peligro causado, el beneficio económico obtenido, la intencionalidad y grado de participación en los hechos, la conducta anterior y capacidad económica del infractor)

se encuentran en línea con resguardar la objetividad en la aplicación de la multa y, a su vez, fomentan su carácter disuasivo.

b) Publicidad de los permisos de edificación:

Si bien es bueno que se simplifique la forma en que se debe realizar la publicidad de la resolución que apruebe estos permisos y que se establezcan requisitos diferentes en razón de si son o no de interés nacional, puede que se esté simplificando en exceso los mecanismos de información. Por medio de la instalación de un cartel y de la publicación del permiso en el Diario Oficial, es improbable que tomen conocimiento todas aquellas personas que podrían estar interesadas o verse afectadas por el otorgamiento de los permisos. Al eliminarla obligación de comunicar por escrito a los vecinos afectados y difundirlo en medios masivos, como radios o periódicos, se ve disminuida, además, la posibilidad de reclamar de éstos, lo que se evidencia, también, en que el proyecto eliminó la obligación de la Municipalidad de informar de los reclamos que se realizaren ante ella.

4.- LEY DE BASES DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SUMINISTROS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

a) Extensión de la aplicación de la ley:

Es favorable, en vista de la transparencia de las contrataciones y del uso de los recursos,

que el Congreso Nacional se rija por los mecanismos establecidos en esta ley para los contratos onerosos de suministro de bienes y servicios que celebre. Además, no existen razones para objetar que los organismos no contemplados en la ley puedan adherir voluntariamente a ella, aunque cabe preguntarse si, en aras a la transparencia, fuera bueno que todo organismo público se rigiera por esta ley para celebrar dichos contratos.

b) Sistema de Información de Compras y Contratación Pública:

Parece favorable la modernización de la forma de efectuarse las licitaciones realizadas por Ministerio de Obras Públicas, y que se realice por medios electrónicos tanto la adquisición y contratación de bienes, como la ejecución contractual, que se encontraba antes excluida.

c) Bases de licitación y contrataciones:

Puede quedar en una mera declaración de principios establecer que la administración deberá propender a utilizar la menor cantidad de recursos, monetarios y no monetarios, en sus contrataciones, si no se establecen mecanismos para ello, como sí se hace con respecto a los fines que deberá promover la Dirección de Compras y Contratación Pública, al establecer el proyecto que debe proponer acciones concretas destinadas a ello, como por ejemplo, establecer procesos de compra colaborativa.

5.- FORMACIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS DE DERECHO PRIVADO

a) Por la Corporación de Fomento de la Producción:

La facultad de crear personas jurídicas sin fines de lucro otorgada en términos amplios por el proyecto a la CORFO, abre la puerta a esta corporación para crear en forma ilimitada estas nuevas instituciones que tienen fuertes similitudes con los institutos tecnológicos filiales de la CORFO, tanto en sus fines como en el tratamiento jurídico que se les otorga. Sin embargo, no se contempla someter a estas nuevas instituciones al régimen jurídico al que están afectas las empresas en que el Estado tiene participación o injerencia mayoritaria, como sí se hace con respecto a los institutos CORFO. Someter a estos últimos a este régimen se debió al doble objetivo de, por un lado, permitir mayor agilización en su gestión funcional y financiera, y a la vez, resguardar los intereses patrimoniales del Estado, mediante la aprobación anual del presupuesto con que operarán estas entidades³; objetivos que no se logran al no aplicar a estas instituciones dichas normas. Por otro lado, tampoco se contempla que estén afectas al mecanismo de fiscalización aplicable a los institutos tecnológicos: el Consejo de la Corporación de Fomento de la Producción conocerá a lo menos cada tres años, una evaluación del cumplimiento de los objetivos, tareas y metas de cada una de ellos; de la naturaleza de las funciones que han desempeñado; de la calidad y pertinencia de los proyectos desarrollados, y de los

3 Historia de la Ley 19.701 que reforma los institutos tecnológicos CORFO.

demás aspectos de la gestión operativa y económica que se consideren relevantes⁴. Al no encontrarse expuestas a fiscalización de su gasto ni a evaluación del cumplimiento de sus objetivos, las nuevas instituciones tendrán mayores libertades, con los riesgos que ello implica. Por otro lado, que estas personas jurídicas puedan, a su vez, participar en la constitución de personas jurídicas con o sin fines de lucro con un máximo de un tercio del capital o de los derechos sociales, parece ser una manera indirecta de saltarse el quórum calificado requerido para la constitución de empresas del Estado, toda vez que, al realizar actividad empresarial y obtener fondos públicos para ello, se las puede calificar como tales. Para la constitución de las personas de derecho privado con fines de lucro se requeriría una aprobación expresa y previa calificación de porqué es necesaria la participación del Estado en estas empresas. Finalmente, aun cuando se declara que las nuevas instituciones no ejercerán potestades públicas, se corre el riesgo de que se creen nuevos organismos como la CONAF, ente privado con relevantes fines públicos, que ha merecido fuertes críticas por ello en el último tiempo.

b) Por el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones:

Se hace la misma crítica en relación a la falta de regulación en cuanto a la fiscalización económica y operacional de esta institución, mencionada en la letra anterior.

6.- MODIFICACIONES A LA TRAMITACIÓN DE NORMAS

a) Tramitación de proyectos de ley:

Es adecuado que los proyectos de ley incluyan dentro de sus fundamentos un informe de evaluación de impacto regulatorio, que analice los efectos cuantitativos y cualitativos del proyecto. Sin embargo, la definición de éstos como “costos probables y beneficios asociados tanto para el sector público como para el privado” es insuficiente. Debería explicitarse el contenido que debe incluir el informe, de manera que enmarque el instructivo que dé el Presidente de la República a sus ministros y lo que establezcan el Senado y la Cámara de Diputados en sus reglamentos.

b) Tramitación de Decretos Supremos:

Parece de toda razonabilidad que si los ministerios efectúan trámites de información pública o consulta pública sobre decretos supremos que aprueben, modifiquen o deroguen reglamentos, acompañen dichos antecedentes al documento sometido a consideración del Presidente de la República, para su correcto conocimiento.

7.- MODIFICACIONES A IMPUESTOS

a) Impuesto Adicional:

En ciertos casos, los contribuyentes del impuesto adicional (contribuyentes que tienen domicilio o residencia en el exterior) al realizar

4 Artículo 2° de la Ley 19.701.

remesas o retiros de utilidades de empresas sujetas al régimen de imputación parcial de créditos, deben restituir, a título de débito fiscal, el 35% del monto del crédito por el impuesto de primera categoría pagado por la empresa en Chile, lo cual no es aplicable cuando el contribuyente resida en un país con el cual Chile hubiere suscrito un convenio para evitar la doble tributación. Es eficiente que el certificado de residencia fiscal, emitido por la autoridad del país respectivo, acredite la residencia del inversionista durante todo año el comercial en que se emita.

b) Impuesto a la renta:

De acuerdo a la ley, para que el mayor valor en la venta de un instrumento de deuda de oferta pública sea considerado como ingreso no renta, es necesario que entre la adquisición y la enajenación haya transcurrido al menos un año. El Ministerio de Hacienda puede establecer por decreto un plazo inferior, el que actualmente está fijado en una hora. El proyecto permite ahora, que por medio de decreto, el Ministerio exima del cumplimiento del plazo. Eso es para beneficiar, según el mensaje, las enajenaciones en las cuales la adquisición y la enajenación ocurren de forma simultánea. Sin embargo, a pesar de que la ley permita un plazo inferior, es discutible que por medio de un decreto, y no de una ley, se pueda modificar un elemento del tributo, esto es, el plazo, que corresponde a la base de cálculo. Por lo tanto, si no es necesario el transcurso de un plazo entre la adquisición y enajenación debería ser la ley la que derechamente lo establezca.

c) Impuesto a las Ventas y Servicios:

El proyecto permite a cualquier persona natural o jurídica, residente o domiciliada en el país, acceder a la exención del impuesto a las ventas y servicios respecto de bienes de capital importados destinados a ciertos fines definidos en la ley, que impliquen una inversión por un monto igual o superior a US\$5.000.000, y ya no tan sólo inversionistas. Es correcta esta aclaración, en cuanto no debe importar la calidad de la persona que realiza el acto, sino el tipo de inversión realizada para efectos de establecer la exención. Es también favorable para la productividad que se elimine el requisito establecido para conceder la exención de que la importación de los bienes de capital destinados a los proyectos de inversión fuera al menos doce meses antes de la internación de los bienes al país, o de su adquisición en Chile, o bien, desde la dictación de la resolución de calificación ambiental u otorgamiento de la concesión de uso oneroso del terreno, según corresponda, con el fin, de acuerdo al mensaje, de evitar el retraso de inicio de las operaciones, que se generaba al tener que esperar el cumplimiento del plazo para evitar tener que restituir el IVA eximido.

d) Impuesto al Valor Agregado:

No existen razones para objetar que se faculte al Ministerio de Hacienda a autorizar a los exportadores a acogerse al sistema de recuperación anticipado del IVA. Además, es lógico que se permita a la empresa subsistente de un proceso de reorganización empresarial, mantener vigente la autorización para obtener la recuperación del IVA, cuando ya no sea el titular del beneficio, sino ella, quien realice las

exportaciones comprometidas en el proyecto de inversión, cuando es, para todos los efectos legales, su sucesora legal.

e) Impuestos a instrumentos derivados:

La ley establece que los contribuyentes que celebren contratos de derivados deben realizar declaraciones juradas al Servicio de Impuestos Internos, para efectos de fiscalización de los impuestos asociados. En caso de que no se realicen las declaraciones o se hagan de forma incompleta, se aplicarán sanciones, cuya intensidad dependerá de si hubo o no dolo en la omisión. El proyecto faculta a que no se apliquen las sanciones en caso de que el contribuyente presente declaraciones rectificatorias en la forma establecida por resolución exenta del SII. Sin embargo, no distingue si se refiere sólo a los casos en que la omisión no fue maliciosa o incluye también a los casos en que medió dolo. El mensaje señala que se considera injusto que se equiparen las sanciones en caso de que exista un simple error y en caso de que exista dolo, lo que llevaría a pensar que sólo se aplicaría al primer caso. Es necesario aclarar este punto para evitar confusiones. Con respecto a que el proyecto permite que se deduzcan las pérdidas y gastos asociados a la operación de derivados cuando no se realicen por intermediarios autorizados (esto es, bancos, instituciones financieras u otros entes establecidos en la ley) cuando cuenten con fecha cierta por alguno de los mecanismos que establece la ley, es apropiado en cuanto que la fecha cierta hace plena fe de que las transacciones se realizaron en un momento determinado.

8.- INCENTIVAR LA INVERSIÓN EXTRANJERA

a) Marco para la inversión extranjera:

Los inversionistas extranjeros pueden solicitar un certificado emitido por la Agencia de Promoción de la Inversión Extranjera con el fin de habilitar el acceso al régimen aplicable a la inversión extranjera directa. Para ello, el inversionista debe acreditar la materialización de su inversión en el país, o bien, (introducida esta posibilidad por el proyecto) acompañar copia de la resolución otorgada por el Ministerio de Hacienda que reconoce el cumplimiento de los requisitos para la exención del impuesto a las ventas y servicios de los inversionistas extranjeros, respecto de bienes de capital importados destinados a determinadas áreas. Que se pueda comprobar su calidad de inversionista de este modo es adecuado, en cuanto para haber obtenido dicha resolución tuvo que haber materializado una inversión por un monto igual o superior a US\$5.000.000.

b) Sistema de comercio exterior:

Que el proyecto ordene a los organismos públicos participantes y responsables de los procesos de comercio exterior utilizar las herramientas electrónicas disponibles para facilitar el comercio y reducir los obstáculos a los procesos de las exportaciones, importaciones y tránsito de mercancías, podría quedar en una mera declaración de intenciones. Por ello, es adecuado que el Ministerio de Hacienda establezca mediante reglamento los estándares mínimos, requisitos tecnológicos y plazos para que cada organismo cumpla con el funcionamiento de dicho sistema, ya que sin éstos, la promoción

del comercio exterior dependería mucho de la voluntad política.

10.- INSTRUMENTOS FINANCIEROS

a) **Sistemas de compensación y liquidación de instrumentos financieros:**

No existen razones para objetar los nuevos conceptos introducidos por el proyecto, ya que adecúan el sistema a estándares internacionales. Cliente es quien puede ingresar órdenes de compensación a un sistema y otorgar garantías, sin adquirir con ello la condición de participante. Puede participar de manera directa o través de un participante, pero en todos los casos será el participante el responsable de las obligaciones asociadas a las operaciones que realice, ya sea que actúe por cuenta propia o de terceros. Segregación es el registro que debe llevar la sociedad administradora de las órdenes de compensación ingresadas y las garantías otorgadas por cada participante, cliente o grupo de clientes, a fin de permitir que se efectúen de manera separada la compensación y liquidación de las órdenes, de la realización de las garantías correspondientes, y, también, para permitir la portabilidad. Potabilidad es la calidad inherente de las órdenes de compensación y garantías por su registro en las cuentas y sub-cuentas de cada participante, cliente o grupo de clientes, que faculta a la sociedad administradora a traspasarlas a otro participante, sin considerarse como una nueva transacción, en virtud de haberse verificado un incumplimiento de las obligaciones del participante primitivo o de otras normas

de funcionamiento que tengan el mismo efecto. El resto de las modificaciones a la ley son concordantes con estas tres nuevas definiciones, ya sea ordenando registrar las órdenes de compensación, en forma segregada, como estableciendo el deber de las sociedades de efectuar los traspasos en los casos de portabilidad. Por último, es adecuado que la Comisión para el Mercado Financiero comparta información con los organismos relacionados, ya que se genera una interconexión necesaria para abordar de manera global una misma situación.

b) **Entidades privadas de depósito y custodia de valores:**

El proyecto adecúa las empresas de depósito de valores a estándares internacionales al establecer que deberán contar con un gobierno corporativo y con un sistema de gestión de riesgos. Es importante también, que se les permita proporcionar información sobre los valores recibidos en depósito a organismos jurisdiccionales con los que Chile haya suscrito acuerdos de intercambio de información, respecto a ciudadanos, residentes o entidades organizadas bajo las leyes de dichas jurisdicciones, para obtener información recíproca de nuestros ciudadanos en otros países y así evitar que eludan las normas de tributación chilenas.

c) **Bolsas de Productos:**

En favor del mayor comercio de productos, es adecuado que se extienda la regulación de ley 19.220, a bolsas de productos de destinos bienes, y no sólo agropecuarios. Con respecto a que ya no sea la Comisión para el Mercado Financiero, sino las mismas bolsas, las que

llevarán un Registro de Productos en el que se inscriban los padrones que describan las características y condiciones que deberán cumplir los productos que se podrán transar en la bolsa, y que llevarán también los Registros de Entidades Certificadoras, que llevaba antes el Servicio Agrícola y Ganadero, se deja sin regulación quién estará a cargo de la fiscalización de estos registros, ni la capacidades de reclamo en caso de que sea rechazada alguna solicitud de incorporación. Tampoco se establece que los rechazos deban ser fundados. Debería regularse la posibilidad de que se establezca un recurso ante la Comisión.

11.- FOMENTO AL CAPITAL DE RIESGO:

El proyecto se hace cargo de las fuertes demandas por parte de las organizaciones dedicadas a promover el capital de riesgo, de que la CORFO invierta mayores recursos a los fondos de inversión nacionales que inviertan en capital de riesgo y también, en

aquellos fondos cuyo objeto sea la inversión en cuotas de fondos de inversión de capital de riesgo -denominados “fondo de fondos” en el mensaje del proyecto-. La autorización que se establece para invertir en estos fondos es permanente y no limitada a una cantidad de años, como se contemplaba en la ley modificada (Ley 20.712) y elimina el monto máximo de UTM2.000.000 al momento de asumir cada compromiso de suscripción (que se podía extender a UTM3.500.000 con la autorización del Ministerio de Hacienda). Todo esto permitirá un mayor crecimiento a la innovación, incentivando con los mayores recursos la actividad económica de los actores de este mercado. Además, al permitir que dentro de los fondos en los cuales puede invertirla CORFO participen inversionistas institucionales, permite la captación de mayores recursos. Por último, al autorizar a la CORFO a aceptar que el pago de estos créditos sea hasta los recursos disponibles del fondo, extinguiéndose la obligación por el exceso, se aleja de una figura de préstamo a las empresas de innovación, tratándose derechamente a la figura como una inversión, en la cuál es la misma CORFO la que toma la decisión consciente de invertir o no, asumiendo los riesgos correlativos ■■■■

VI. TEXTO DEL PROYECTO DE LEY

Artículo 1.- Introdúcense las siguientes modificaciones en la ley N° 19.799, sobre documentos electrónicos, firma electrónica y servicios de certificación de dicha firma:

1. Modifícase el artículo 2 en la siguiente forma:

a) Modifícase el literal g) del siguiente modo:

- i. Intercálase, entre las expresiones “acreditado” y “, que ha sido creada”, lo siguiente: “o por un órgano público, según corresponda”.
- ii. Intercálase, entre las expresiones “medios” y la frase “que el titular”, lo siguiente: “o datos”.
- iii. Elimínase la palabra “exclusivo”⁵.

b) Agréganse los siguientes literales j) y k), nuevos:

“j) Sellado de tiempo: asignación por medios electrónicos de la fecha y hora en que se suscribe un documento electrónico con la intervención de un prestador acreditado de servicios de certificación o de un órgano público, el que da cuenta de la exactitud e integridad de la fecha.

k) Identificación Digital Única: mecanismo de identificación de personas naturales y jurídicas por medios electrónicos efectuado por el Servicio de Registro Civil e Identificación y el Servicio de Impuestos Internos, cuando corresponda, que, además, constituye firma electrónica simple y puede ser utilizado entre particulares y ante los órganos públicos. Su uso, características y procedimiento se establecerán por reglamento emitido a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y que será suscrito también por los Ministros de Hacienda y Secretario General de la Presidencia.”.

5 La letra g) artículo 2° quedaría con la siguiente redacción:

Artículo 2°.- Para los efectos de esta ley se entenderá por:

g) Firma electrónica avanzada: aquella certificada por un prestador acreditado, o por un órgano público, según corresponda, que ha sido creada usando medios o datos que el titular mantiene bajo su ~~exclusivo~~ control, de manera que se vincule únicamente al mismo y a los datos a los que se refiere, permitiendo la detección posterior de cualquier modificación, verificando la identidad del titular e impidiendo que desconozca la integridad del documento y su autoría,

2. Reemplázanse los artículos 4⁶ y 5⁷, por los siguientes:

“Artículo 4.- Los documentos electrónicos en que consten actos o contratos sólo tendrán la calidad de instrumento público, para todos los efectos legales, cuando sean suscritos con firma electrónica avanzada y sellado de tiempo.

En los demás casos, los documentos electrónicos tendrán la calidad de instrumento privado para todos los efectos jurídicos, sin perjuicio de lo establecido en el artículo siguiente.

En todos aquellos casos en que el ordenamiento jurídico requiera que las firmas de los otorgantes de un determinado acto jurídico deban ser autorizadas, ratificadas o el acto firmado ante notario u otro ministro de fe, sea como solemnidad del acto o como requisito para hacerlo oponible ante terceros o para cualquier otro efecto legal, dicho requisito o solemnidad se entenderá cumplido por el sólo hecho de que el acto conste en un documento electrónico suscrito por el otorgante o las partes, según corresponda, con firma electrónica avanzada y sellado de tiempo, si así lo exigiera la ley.

A menos que una ley disponga lo contrario, no se requerirá sellado de tiempo en los documentos electrónicos generados de conformidad con las exigencias establecidas en leyes especiales y en los que un órgano de la Administración del Estado reciba una confirmación de la generación o firma del documento.

En caso alguno podrán los órganos públicos negarse a recibir un documento electrónico si éste cumple con las exigencias establecidas en la ley.

Artículo 5.- Los documentos electrónicos suscritos con firma electrónica tendrán igual mérito probatorio que los instrumentos suscritos con firma manuscrita y en soporte de papel.

Para efectos de lo anterior, se aplicarán las siguientes reglas:

1ª Los documentos electrónicos en que consten actos o contratos suscritos con firma electrónica avanzada y sellado de tiempo, tengan o no la calidad de instrumento público, harán plena fe de acuerdo al artículo 17008 del Código Civil

2ª Los documentos electrónicos que tengan la calidad de instrumentos privados, en cuanto hayan sido suscritos con firma electrónica avanzada, tendrán el mismo valor probatorio señalado en el número anterior. Sin embargo, no harán

6 Artículo 4°, que se deroga:

Artículo 4°.- Los documentos electrónicos que tengan la calidad de instrumento público, deberán suscribirse mediante firma electrónica avanzada.

7 Artículo 5°, que se deroga:

Artículo 5°.- Los documentos electrónicos podrán presentarse en juicio y, en el evento de que se hagan valer como medio de prueba, habrán de seguirse las reglas siguientes:

1.- Los señalados en el artículo anterior, harán plena prueba de acuerdo con las reglas generales, y

2. Los que posean la calidad de instrumento privado, en cuanto hayan sido suscritos con firma electrónica avanzada, tendrán el mismo valor probatorio señalado en el número anterior. Sin embargo, no harán fe respecto de su fecha, a menos que ésta conste a través de un fechado electrónico otorgado por un prestador acreditado.

En el caso de documentos electrónicos que posean la calidad de instrumento privado y estén suscritos mediante firma electrónica, tendrán el valor probatorio que corresponda, de acuerdo a las reglas generales.

8 Artículo 1700°, vigente:

Art. 1700. El instrumento público hace plena fe en cuanto al hecho de haberse otorgado y su fecha, pero no en cuanto a la verdad de las declaraciones que en él hayan hecho los interesados. En esta parte no hace plena fe sino contra los declarantes.

Las obligaciones y descargos contenidos en él hacen plena prueba respecto de los otorgantes y de las personas a quienes se transfieran dichas obligaciones y descargos por título universal o singular.

fe respecto de su fecha, la que deberá probarse de acuerdo a las reglas generales aplicables a los instrumentos privados, a menos que ésta conste a través de un sellado de tiempo.

3ª Los documentos electrónicos que tengan la calidad de instrumentos privados y estén suscritos mediante firma electrónica, tendrán el valor probatorio que corresponda de conformidad a lo dispuesto en el artículo 346⁹ del Código de Procedimiento Civil.”

3. Agrégase, en el artículo 8¹⁰, los siguientes incisos tercero y final, nuevos:

“Cuando los órganos del Estado requieran identificar por medios electrónicos a las personas naturales deberán permitir el uso de la Identificación Digital Única provista por el Servicio de Registro Civil e Identificación. Además, dicho Servicio podrá otorgar certificados de firma electrónica avanzada a las personas, de conformidad al reglamento de la presente ley.

Las personas jurídicas podrán relacionarse con los órganos del Estado a través de la Identificación Digital Única, cuya clave de acceso será entregada por el Servicio de Impuestos Internos al o los representantes registrados ante dicho Servicio, una vez verificados los poderes de representación en la forma y condiciones que determine el reglamento.”.

4. Reemplázase, en el literal e) del artículo 12, la expresión “, para lo cual el prestador requerirá previamente, ante sí o ante notario público u oficial del registro civil, la comparecencia personal y directa del solicitante o de su representante legal si se tratare de persona jurídica”, por la siguiente: “de conformidad a los procedimientos, requisitos y modalidades que señale el reglamento de la presente ley”¹¹.

9 Artículo 346°, vigente:

Art. 346 (335). Los instrumentos privados se tendrán por reconocidos:

- 1°. Cuando así lo ha declarado en el juicio la persona a cuyo nombre aparece otorgado el instrumento o la parte contra quien se hace valer;
- 2°. Cuando igual declaración se ha hecho en un instrumento público o en otro juicio diverso;
- 3°. Cuando, puestas en conocimiento de la parte contraria, no se alega su falsedad o falta de integridad dentro de los seis días siguientes a su presentación, debiendo el tribunal, para este efecto, apercibir a aquella parte con el reconocimiento tácito del instrumento si nada expone dentro de dicho plazo; y
- 4°. Cuando se declare la autenticidad del instrumento por resolución judicial.

10 Artículo 8°, vigente:

Artículo 8°.- Las personas podrán relacionarse con los órganos del Estado, a través de técnicas y medios electrónicos con firma electrónica, siempre que se ajusten al procedimiento descrito por la ley y que tales técnicas y medios sean compatibles con los que utilicen dichos órganos.

Los órganos del Estado deberán evitar, al hacer uso de firmas electrónicas, que se restrinja injustificadamente el acceso a las prestaciones que brinden y a la publicidad y transparencia que rijan sus actuaciones y, en general, que se cause discriminaciones arbitrarias.

[...].

[...].

11 La letra e) del artículo 12° quedaría con la siguiente redacción:

Artículo 12.- Son obligaciones del prestador de servicios de certificación de firma electrónica:

- e) En el otorgamiento de certificados de firma electrónica avanzada, comprobar fehacientemente la identidad del solicitante, ~~para lo cual el prestador requerirá previamente, ante sí o ante notario público u oficial del registro civil, la comparecencia personal y directa del solicitante o de su representante legal si se tratare de persona jurídica de conformidad a los procedimientos, requisitos y modalidades que señale el reglamento de la presente ley;~~

Artículo 2.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el Código de Procedimiento Civil:

1. Modifícase el artículo 345 de la siguiente forma:

- a) Elimínase, en el numeral 2, la expresión “y”, la última vez que aparece.
- b) Reemplázase, en el numeral 3, el punto final por la expresión “, y;”.
- c) Agrégase el siguiente numeral 4, nuevo:

“4° La homologación, efectuada por un certificador acreditado de conformidad a lo dispuesto en la ley N° 19.799¹², del certificado de firma electrónica avanzada, respecto de documentos electrónicos cuya firma electrónica avanzada es certificada por una empresa extranjera. En el caso que el certificado de firma no acredite el carácter de los funcionarios, se estará al atestiguamiento señalado en los numerales anteriores.”¹³.

2. Reemplázase el artículo 348 bis¹⁴, por el siguiente:

12 Ley sobre documentos electrónicos, firma electrónica y servicios de certificación de dicha firma.

13 El artículo 345° quedaría con la siguiente redacción:

Art. 345 (334). Los instrumentos públicos otorgados fuera de Chile deberán presentarse debidamente legalizados, y se entenderá que lo están cuando en ellos conste el carácter público y la verdad de las firmas de las personas que los han autorizado, atestiguadas ambas circunstancias por los funcionarios que, según las leyes o la práctica de cada país, deban acreditarlas.

La autenticidad de las firmas y el carácter de estos funcionarios se comprobará en Chile por alguno de los medios siguientes.

- 1°. El atestado de un agente diplomático o consular chileno, acreditado en el país de donde el instrumento procede, y cuya firma se compruebe con el respectivo certificado del Ministerio de Relaciones Exteriores;
- 2°. El atestado de un agente diplomático o consular de una nación amiga acreditado en el mismo país, a falta de funcionario chileno, certificándose en este caso la firma por conducto del Ministerio de Relaciones Exteriores del país a que pertenezca el agente o del Ministro Diplomático de dicho país en Chile, y además por el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República en ambos casos; y
- 3°. El atestado del agente diplomático acreditado en Chile por el Gobierno del país en donde se otorgó el instrumento, certificándose su firma por el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República.; y;
- 4°. [...]

14 Artículo 348° bis, que se deroga:

Artículo 348 bis. Presentado un documento electrónico, el Tribunal citará para el 6° día a todas las partes a una audiencia de percepción documental. En caso de no contar con los medios técnicos electrónicos necesarios para su adecuada percepción, apercibirá a la parte que presentó el documento con tenerlo por no presentado de no concurrir a la audiencia con dichos medios.

Tratándose de documentos que no puedan ser transportados al tribunal, la audiencia tendrá lugar donde éstos se encuentren, a costa de la parte que los presente.

En caso que el documento sea objetado, en conformidad con las reglas generales, el Tribunal podrá ordenar una prueba complementaria de autenticidad, a costa de la parte que formula la impugnación, sin perjuicio de lo que se resuelva sobre pago de costas. El resultado de la prueba complementaria de autenticidad será suficiente para tener por reconocido o por objetado el instrumento, según corresponda.

Para los efectos de proceder a la realización de la prueba complementaria de autenticidad, los peritos procederán con sujeción a lo dispuesto por los artículos 417 a 423.

En el caso de documentos electrónicos privados, para los efectos del artículo 346, N°3, se entenderá que han sido puestos en conocimiento de la parte contraria en la audiencia de percepción.

En el caso que los documentos electrónicos acompañados puedan ser percibidos directamente en la carpeta electrónica, el tribunal podrá omitir la citación a audiencia de percepción, debiéndose entender que han sido puestos en conocimiento de la parte contraria desde que se notifica la resolución que los tiene por acompañados bajo el apercibimiento correspondiente.

"Artículo 348 bis.- Los documentos electrónicos serán admisibles en juicio como medios de prueba y tendrán mérito probatorio de conformidad a las reglas generales aplicables a los instrumentos y a lo dispuesto en la ley N° 19.799¹⁵, en lo que resulte pertinente.

Los documentos electrónicos podrán presentarse en soporte físico o desmaterializado que permita su debida inteligencia y percepción y su posterior reproducción, si procediese. La percepción se efectuará en una audiencia de percepción documental, a la que serán citadas todas las partes por el tribunal.

En caso de no contar con los medios técnicos electrónicos necesarios para su adecuada percepción, el tribunal apercibirá a la parte que presentó el documento con tenerlo por no presentado de no concurrir con dichos medios dentro de tercero día.

Tratándose de documentos que no puedan ser transportados al tribunal, la audiencia de percepción se podrá llevar a cabo en el lugar donde éstos se encuentren, dentro de tercero día, a costa de la parte que los presente.

Si una de las partes impugnare la autenticidad de un documento electrónico suscrito con firma electrónica avanzada, el tribunal deberá oficiar al prestador acreditado de servicios de certificación respectivo, o la entidad acreditadora en su caso, para que certifique si el documento electrónico:

- a) Fue suscrito mediante una o más firmas electrónicas avanzadas e individualice a los suscribientes.
- b) Contiene un sellado de tiempo que cumple con los requisitos y condiciones establecidos en la ley N° 19.799¹⁶, en su reglamento, y en las normas técnicas fijadas por la entidad acreditadora para este tipo de certificados.
- c) Ha mantenido su integridad una vez suscrito.

Recibido el informe por el prestador acreditado de servicios de certificación, o la entidad acreditadora, el tribunal deberá rechazar o acoger la impugnación.

El documento electrónico suscrito con firma electrónica simple será reconocido de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 346. En caso que el instrumento fuere impugnado de acuerdo a la regla 3ª del señalado artículo, su tramitación se ajustará a las reglas establecidas para los incidentes. De abrirse un término probatorio, la prueba presentada se apreciará conforme a las reglas de la sana crítica.

Las costas devengadas en razón de este incidente serán de cargo de la parte que resultare vencida.

En el caso que los documentos electrónicos acompañados puedan ser percibidos directamente en la carpeta electrónica, el tribunal podrá omitir la citación a audiencia de percepción, debiéndose entender que han sido puestos en conocimiento de la parte contraria desde que se notifica la resolución que los tiene por acompañados bajo el apercibimiento correspondiente.”.

3. Agrégase, en el inciso final del artículo 434¹⁷¹⁸, a continuación del punto y aparte, que pasa a ser punto y seguido, la siguiente oración:

15 Ley sobre documentos electrónicos, firma electrónica y servicios de certificación de dicha firma.

16 Ley sobre documentos electrónicos, firma electrónica y servicios de certificación de dicha firma.

17 No obstante lo señalado en el proyecto, la oración debería ser agregada en el inciso 2°, del numeral 4°, del artículo citado.

18 Artículo 434°, vigente:

“Asimismo, tendrá mérito ejecutivo, sin necesidad de reconocimiento previo, la letra de cambio o pagaré extendido en documento electrónico y suscrito por el obligado con firma electrónica avanzada y sellado de tiempo, siempre que el impuesto de timbres y estampillas respectivo, sea pagado en los plazos que corresponda según el artículo 15¹⁹ del decreto ley N° 3.475, que modifica la ley de timbres y estampillas contenida en el decreto ley N° 619, de 1974.”.

Art. 434 (456). El juicio ejecutivo tiene lugar en las obligaciones de dar cuanto para reclamar su cumplimiento se hace valer alguno de los siguientes títulos:

- 1°. Sentencia firme, bien sea definitiva o interlocutoria;
- 2°. Copia autorizada de escritura pública;
- 3°. Acta de avenimiento pasada ante el tribunal competente y autorizada por un ministro de fe o por dos testigos de actuación;
- 4°. Instrumento privado, reconocido judicialmente o mandado tener por reconocido. Sin embargo, no será necesario este reconocimiento respecto del aceptante de una letra de cambio o subscritor de un pagaré que no hayan puesto tacha de falsedad a su firma al tiempo de protestarse el documento por falta de pago, siempre que el protesto haya sido personal, ni respecto de cualquiera de los obligados al pago de una letra de cambio, pagaré o cheque, cuando, puesto el protesto en su conocimiento por notificación judicial, no alegue tampoco en ese mismo acto o dentro de tercero día tacha de falsedad.
Tendrá mérito ejecutivo, sin necesidad de reconocimiento previo, la letra de cambio, pagaré o cheque, respecto del obligado cuya firma aparezca autorizada por un notario o por el Oficial del Registro Civil en las comunas donde no tenga su asiento un notario.
- 5°. Confesión judicial;
- 6°. Cualesquiera títulos al portador, o nominativos, legítimamente emitidos, que representen obligaciones vencidas, y los cupones también vencidos de dichos títulos, siempre que los cupones confronten con los títulos, y éstos, en todo caso, con los libros talonarios.
Resultando conforme la confrontación, no será obstáculo a que se despache la ejecución la protesta de falsedad del título que en el acto haga el director o la persona que tenga la representación del deudor, quien podrá alegar en forma la falsedad como una de las excepciones del juicio; y
- 7°. Cualquiera otro título a que las leyes den fuerza ejecutiva.

19 Artículo 15°, vigente:

Artículo 15°.- Salvo norma expresa en contrario los impuestos de la presente ley deberán pagarse dentro de los siguientes plazos:

- N° 1.- Instrumentos privados y otros documentos, dentro de los cinco primeros días hábiles a contar de su emisión, esto es, de ser suscritos por sus otorgantes.
- N° 2.- Los contribuyentes obligados a declarar su renta efectiva mediante un balance general determinado de acuerdo a contabilidad completa, para los efectos de la Ley de la Renta, dentro del mes siguiente a aquel en que se emiten los documentos.
No obstante, los impuestos que gravan los documentos a que se refieren los Nos. 2 y 4 del artículo 1° deberán pagarse, en todo caso, anticipadamente al momento de solicitar su autorización al Servicio de Impuestos Internos o al Organismo que el Director de ese Servicio designe.
- N° 3.- Los bancos, cuando sean el primer responsable del pago del impuesto, y por los documentos que emitan o se tramiten ante ellos: dentro del mes siguiente de efectuado el protesto, emitidos los documentos o admitidos éstos a tramitación, según corresponda.
- N° 4.- El impuesto del artículo 3°, dentro del mes siguiente a aquel en que se devengue.
- N° 5.- Por los documentos y actas de protesto de letras de cambio y pagarés a que se refiere el artículo cuarto.
 - a) Dentro del plazo de sesenta días corridos a contar de la fecha de otorgamiento de la escritura pública, aun cuando no haya sido autorizada por el respectivo funcionario y siempre que el notario no la haya dejado sin efecto;
 - b) Dentro del mes siguiente a la fecha en que se autorizaron o protocolizaron las escrituras privadas o se efectuó la actuación tratándose de protesto de letras de cambio y pagarés.
Los impuestos que según lo dispone el artículo 11° deben retener los funcionarios allí indicados, dentro de los mismos plazos señalados en las letras anteriores, según corresponda.

Artículo 3.- Introdúcense las siguientes modificaciones en la ley N° 18.092, que dicta nuevas normas sobre letra de cambio y pagaré y deroga disposiciones del Código de Comercio:

1. Agrégase, en el artículo 120, el siguiente inciso final, nuevo:

“La letra de cambio también podrá ser extendida mediante documento electrónico en cuyo caso éste deberá ser suscrito con firma electrónica avanzada y sellado de tiempo.”.
2. Agrégase, en el artículo 1721, el siguiente inciso final, nuevo:

“El endoso podrá también extenderse mediante documento electrónico en cuyo caso deberá ser suscrito con firma electrónica avanzada y sellado de tiempo.”.
3. Agrégase, en el artículo 3322, el siguiente inciso final, nuevo:

“La aceptación podrá también extenderse mediante documento electrónico en cuyo caso deberá ser suscrito con firma electrónica avanzada y sellado de tiempo.”.

20 Artículo 1°, vigente:

Artículo 1°.- La letra de cambio deberá contener las siguientes enunciaciones:

- 1.- La indicación de ser letra de cambio, escrita en el mismo idioma empleado en el título;
- 2.- El lugar y fecha de su emisión. No obstante, si la letra no indicare el lugar de la emisión, se considerará girada en el domicilio del librador;
- 3.- La orden, no sujeta a condición, de pagar una cantidad determinada o determinable de dinero;
- 4.- El nombre y apellido de la persona a que debe hacerse el pago o a cuya orden debe efectuarse;
- 5.- El nombre, apellido y domicilio del librado;
- 6.- El lugar y la época del pago. No obstante si la letra no indicare el lugar del pago, éste deberá hacerse en el domicilio del librado señalado en el documento; y si no contuviere la fecha de su vencimiento, se considerará pagadera a la vista, y
- 7.- La firma del librador.

Bajo la responsabilidad del librador, su firma podrá estamparse por otros procedimientos que se autoricen en el Reglamento, en los casos y con las formalidades que en él se establezcan.

Si hubiere varios librados, deberá indicarse un domicilio único para todos ellos.

21 Artículo 17°, vigente:

Artículo 17°.- El endoso es el escrito por el cual el tenedor legítimo transfiere el dominio de la letra, la entrega en cobro o la constituye en prenda.

El endoso debe estamparse al dorso de la letra misma o de una hoja de prolongación adherida a ella.

El endoso debe ser firmado por el endosante.

Bajo la responsabilidad del endosante, su firma podrá estamparse por otros procedimientos que se autoricen en el reglamento en los casos y con las formalidades que en él se establezcan.

22 Artículo 33°, vigente:

Artículo 33°.- La aceptación debe constar en la letra misma por medio de las palabras "acepto", "aceptada" u otras equivalentes y la firma del librado. La sola firma de éste puesta en el anverso de la letra importa aceptación.

4. Agrégase, en el artículo 46²³, el siguiente inciso final, nuevo:
 “El aval podrá también materializarse mediante documento electrónico en cuyo caso deberá ser suscrito con firma electrónica avanzada y sellado de tiempo.”.
5. Agrégase, en el artículo 62²⁴, el siguiente inciso final, nuevo:
 “El protesto también podrá efectuarse mediante documento electrónico, en cuyo caso el funcionario que efectúe la diligencia deberá suscribir con firma electrónica avanzada y sellado de tiempo.”.
6. Agrégase, en el artículo 102²⁵, el siguiente inciso final, nuevo:
 “El pagaré también podrá ser extendido en documento electrónico, en cuyo caso deberá ser suscrito con firma electrónica avanzada y sellado de tiempo.”.

23 Artículo 46°, vigente:

Artículo 46.- El aval es un acto escrito y firmado en la letra de cambio, en una hoja de prolongación adherida a ésta, o en un documento separado, por el cual el girador, un endosante o un tercero garantiza, en todo o en parte, el pago de ella. La sola firma en el anverso de la letra o de su hoja de prolongación constituye aval, a menos que esa firma sea del girador o del librado. Otorgado en el dorso debe contener, además de la firma del avalista la expresión “por aval” u otra equivalente.

Otorgado en documento separado debe, además de la firma del avalista, expresar que el acto es un aval e identificar claramente la letra a la cual concierne. Los derechos que emanan de un aval otorgado en instrumento separado, no se transfieren por endoso.

El acto que no reúna los requisitos señalados en este artículo, no constituye aval.

24 Artículo 62°, vigente:

Artículo 62.- El protesto se estampará en el dorso de la letra o en una hoja de prolongación de ella y deberá contener:

- a) La constancia de haberse entregado el aviso indicado en el artículo anterior y la fecha en que tal entrega se produjo;
- b) La relación de que el librado no aceptó la letra en los términos en que ella fue girada, o que no fechó la aceptación o que no pagó íntegramente, según sea el caso. En el evento de pago parcial deberá expresar su monto;
- c) Un resumen de lo que exprese el librado para no aceptar, no fechar o no pagar la letra, si compareciere a la citación; o la constancia de que el librado no compareció o nada dijo;
- d) El número con que el protesto aparece en el registro de que trata el artículo siguiente;
- e) Los impuestos y derechos cobrados;
- f) La fecha, hora y lugar del protesto, y
- g) La firma del funcionario que haya practicado la diligencia.

25 Artículo 102°, vigente:

Artículo 102.- El pagaré debe contener las siguientes enunciaciones:

- 1.- La indicación de ser pagaré, escrita en el mismo idioma empleado en el título;
- 2.- La promesa no sujeta a condición, de pagar una determinada o determinable cantidad de dinero;
- 3.- El lugar y época del pago. No obstante, si el pagaré no indicare el lugar del pago, se entenderá que éste debe efectuarse en el lugar de su expedición; y si no contuviere la fecha de vencimiento, se considerará pagadero a la vista;
- 4.- El nombre y apellido del beneficiario o la persona a cuya orden se ha de efectuar el pago o la indicación de que es pagadero al portador;
- 5.- El lugar y fecha de expedición, y
- 6.- La firma del suscriptor.

EL TEXTO DEL PROYECTO DE LEY CONTINÚA EN RESEÑA 1321 - VOLUMEN II